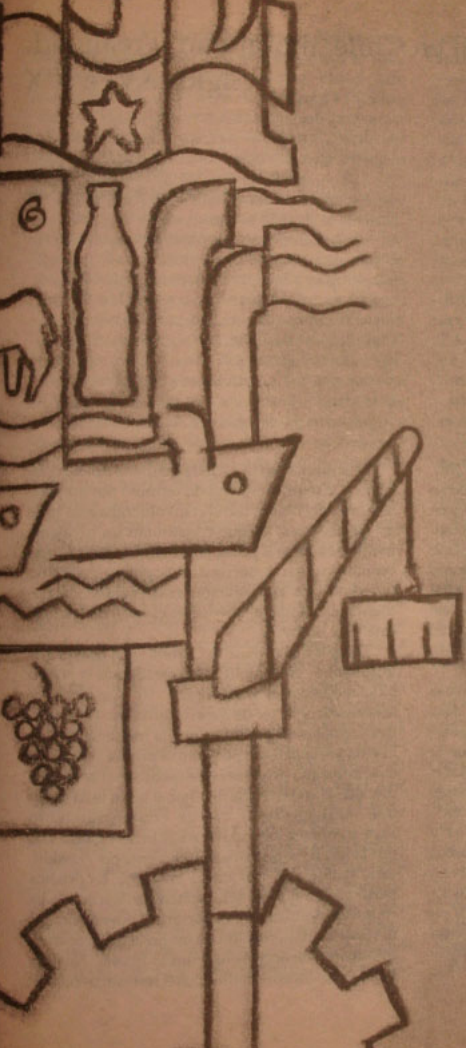


NUEVOS
ACTORES:
MUJER Y
JUVENTUD



La familia tradicional en Chile: moralidad y realidad. Siglos XVI a XIX

René Salinas Meza
Universidad de Santiago de Chile

La evolución del matrimonio y la familia en Chile, así como la de la familia latinoamericana en general, se sustenta en la tradición de la conquista y en la doctrina político-social de la Corona, no obstante que éstas se contraponen: mientras la tradición de la conquista tendió a favorecer las uniones casuales y múltiples, concubinato, amancebamiento con mujeres aborígenes, la doctrina real buscó la consolidación de una sociedad señorial con una marcada tendencia –al menos en teoría– a la homogeneidad racial.

La búsqueda de esa homogeneidad indujo a la Corona a restringir las autorizaciones para que los súbditos contrajesen matrimonio con personas de grupos étnicos diferentes, y a favorecer, por lo mismo, la reunión de los primeros conquistadores que iniciaron solos la colonización, y sus esposas españolas. Variadas disposiciones reales se concibieron para facilitar la emigración femenina a América o para acelerar el traslado de familias completas. Sin embargo, la realidad generada en los nuevos territorios hizo impracticable el proyecto real de sociedad, terminando por tolerar, si no aceptar los "matrimonios mixtos". Estos fueron permitidos ya en 1501, al menos en el contexto de la experiencia antillana.

La situación en la sociedad chilena no fue diferente, y el matrimonio mixto terminó por aceptarse y favorecerse incluso si él involucraba a las hijas de los caciques, ya que constituían un excelente medio de acceso al poder local, tanto político como económico. Así se fue consolidando muy tempranamente una constitución matrimonial fuertemente asociada a consideraciones de poder, estatus y dominio.

Tampoco tuvo éxito la Corona –y la Iglesia que la apoyaba– en su política de estabilizar la población mediante el matrimonio, ya que tanto su acentuado carácter de desarraigo como las actitudes mentales no proclives ni a la moderación ni a la vida familiar entorpecieron el proyecto real. No es aventurado proponer que tanto durante el siglo dieciséis como en parte del siglo diecisiete, la sociedad chilena tuvo cierto comportamiento marcadamente permisivo en el orden moral, del que la Iglesia se quejó reiteradamente por considerarlo reñido con la doctrina cristiana. La prédica periódica en que se denunciaba los "excesos", así como ejemplificadoras sanciones, intentaron garantizar la manutención de un nivel de relaciones mínimamente aceptables para la Iglesia. No obstante, estos ingentes esfuerzos eclesíasticos no fue-

ron capaces de impedir los altos porcentajes de ilegitimidad, de convivencia consensual, de relaciones prematrimoniales, de "tratos" ilícitos y de excesos y delitos sexuales. Por el contrario, estas conductas configuraron en buena medida el carácter de la sociedad chilena tradicional, haciendo imperceptibles los límites entre lo condenable y lo permitido (Salinas & Cavieres 1991).

Es muy probable que todas las distorsiones y desviaciones de los primeros años de la sociedad chilena sean resultado de los avatares de la conquista y del proceso de colonización en vías de cristalización que estaban viviendo, ya que la norma cultural nunca dejó de privilegiar un ordenamiento social en torno a la familia como estructura básica. En la historia de Chile, la institución familiar muestra, al menos, dos configuraciones típicas: la tradicional y moderna. La primera, con una estructura de tipo nuclear, estuvo fuertemente determinada por las condiciones socioeconómicas imperantes, como por ejemplo en su reducido tamaño, en su bajo promedio de hijos y en la tardía edad en que se llegaba al matrimonio, al menos en las áreas rurales. En la sociedad tradicional, matrimonio y familia parecieron estar determinados tanto por la miseria como por la moralidad (McCaa 1983).

El proceso de urbanización que conoció la sociedad chilena desde la segunda mitad del siglo diecinueve parece coincidir con un proceso de transformación en la familia rural tradicional. La edad promedio al primer matrimonio, que en el siglo dieciocho era de 22 años para la mujer y de 26 para los hombres, bajó a 20,5 y 25 años respectivamente a mediados del siglo diecinueve, en las áreas más urbanizadas. Entre 1860 y 1862, el porcentaje de mujeres casadas por primera vez, en las edades entre 20 y 26 años, ascendía 43,21 por ciento, en tanto el de aquellas entre 15 y 19 años, sólo a un 22,98 por ciento (Salinas 1987).

Complementaria y coincidentemente, McCaa señala lo mismo en su trabajo sobre matrimonio y fertilidad en Chile para el caso del área rural de Petorca entre 1840 y 1976. Si bien argumenta como mayormente significativo el fenómeno de "emparejamiento" o convivencia de *facto* más que el del matrimonio, y pese a las presiones económicas,

sociales, psicológicas y religiosas que operaban en favor de este último, establece que para los petorquinos el promedio de edad al momento del emparejamiento era de algo más de 22,7 años, casi dos años y medio antes del matrimonio. En los años de 1860, la edad promedio para el matrimonio y el emparejamiento se había elevado en unos dos años, a 25,9 y 23,7 respectivamente. El retraso en la edad de emparejamiento era mayor en las novias de los campesinos (2,4 años) y menor en las mujeres cuyos novios poseían ocupaciones urbanas (1,6 años), lo que pone en evidencia el peso que para el emparejamiento o matrimonio ejercían las difíciles condiciones de vida en la zona, en términos de escasez de viviendas, tierra, e incluso, agua. Ello derivó en dos fenómenos contrapuestos. De un lado, altas tasas de celibato permanente (el censo de 1865 arroja un 30 por ciento, guarismo casi 50 por ciento más alto que los patrones históricos de Europa Occidental), así como concubinato, ilegitimidad del otro. La monografía de McCaa es, sin lugar a dudas, iluminadora respecto de la influencia de las variables socioeconómicas y culturales que gravitan permanentemente en la consolidación del matrimonio y la familia (McCaa 1983).

El tamaño de la familia en Chile en los siglos dieciocho y diecinueve no fue excesivamente amplio. En San Felipe en el siglo diecinueve, el promedio de hijos ascendió a 6,48 - 6,68. El La Ligua, entre 1700 y 1850, fue de 6,48. En Valparaíso, en 1850 y de acuerdo con testamentos y registros de bautismos parroquiales, ascendió a 4,80 hijos. (Para San Felipe y Valparaíso, Salinas & Cavieres 1991; para La Ligua, Mellafe & Salinas 1988:168).

Como en casi todas las sociedades tradicionales, el número de hijos sobrevivientes hasta edades adultas fue minoritario. En general, la probabilidad de alcanzar 18 años o más, era válida aproximadamente sólo para 30 o 40 por ciento de los nacidos.

Las etapas del cortejo, así como la formación de la pareja, eran componentes significativos de la vida social de Chile tradicional, la que giraba alrededor de los rituales así como de los avatares del cortejo, concubinato y matrimonio. En algunos casos, como ya hemos indicado, el celibato era

común, más no la castidad. La licencia sexual y el concubinato constituían las etapas convencionales del cortejo, pese a la omnipresente sanción de la Iglesia, los padres y los valores sociales en beneficio del matrimonio como la única forma de unión deseable.

Asimismo, y como un dato extraordinariamente importante en el contraste entre la familia tradicional y la moderna, se puede establecer que la familia de tipo tradicional sancionó la génesis de una sociedad conyugal más que una unión de tipo afectivo. Se deduce del análisis de dotes y aportes al matrimonio durante el siglo dieciocho que, a lo menos externamente, la familia tradicional fue mucho más una unidad productiva y reproductiva que emocional.

Una serie de testamentos de la segunda mitad del siglo dieciocho permite constatar que, por lo general, ambos esposos aportaban bienes al inicio del matrimonio (42 por ciento de los casos observados). En un tercio de ellos, el matrimonio se constituyó con el aporte de un solo cónyuge, preferentemente la mujer. El porcentaje de matrimonios iniciados sin aportes de bienes fue muy bajo (sólo 4 por ciento) y, si evaluamos los bienes que aportaba uno u otro de los novios, éstos eran por lo general muy similares. Además, el balance declarado en el testamento casi al final de la vida matrimonial demuestra que en 80 por ciento de las parejas el patrimonio común se había acrecentado.

La sociedad tradicional recurrió a menudo al mecanismo de la dote, tanto para asegurar los valores de los bienes conyugales como para salvaguardar a la mujer frente a los excesos o irresponsabilidad del esposo. La dote debía ser administrada sólo por el marido y no podía utilizarse por el nuevo jefe de hogar sin el consentimiento de su mujer, al menos en teoría. Sin duda, en otros casos la dote fue también empleada como elemento de la red de vinculaciones y compromisos sociales y económicos entre familias y como medio para el acrecentamiento del poder local (Salinas & Cavieres 1991).

En el tránsito de esta sociedad tradicional a la modernidad, la familia fue abandonando su función primordial como transmisora de la propiedad y del estatus. Rompió los lazos con el exterior y

aumentó su interés por las relaciones que unían a sus componentes. Fue así como surgió en el seno de la familia la preocupación por el bienestar de los hijos hasta que alcanzaran su autonomía, casi siempre acompañada de una exteriorización de los sentimientos afectivos. Además, la misma pareja se permitió expresar sus afectos, de tal modo que la emocionalidad podría ser concebida como un aporte de la modernidad a las relaciones intrafamiliares.

Entre los siglos dieciocho y diecinueve, y producto del lento paso de una sociedad estamental a una de clases, la familia chilena experimentó profundas transformaciones. Ambos tipos de sociedad se caracterizan por poseer sistemas valóricos diferentes que desembocan, al mismo tiempo, en distintas implicancias culturales, religiosas y psicológicas e imprimen otras tantas variaciones a las modalidades de organización familiar. Es así como durante el siglo diecinueve la situación parece favorable más a las familias del área semiurbana o urbana, ya que dentro del ámbito rural, exceptuando las áreas de gran propiedad hacendal, se produce una subdivisión constante de las propiedades, con la consiguiente pauperización; mientras que en los centros urbanos las diferencias económicas se profundizan cada vez más, disminuyendo paulatinamente el nivel de vida de los sectores populares.

Como ya hemos señalado, uno de los factores más importantes del surgimiento de la familia moderna en relación a la tradicional lo constituyó la aparición de modernas relaciones intrafamiliares cargadas de afectos, cuidados y simpatías, en lugar de los tradicionales elementos de traspaso generacional, tales como estatus y propiedad (Cavieres 1991). Por el contrario, el rol de la mujer no experimentó cambio alguno y, al igual que en la sociedad tradicional, durante el proceso de modernización social continuó desempeñando un rol fundamental como agente activo del proceso productivo, esencial para la subsistencia del grupo familiar. La precariedad e incluso el deterioro de los recursos económicos de los sectores populares acentuó la urgencia del empeño laboral de los padres y puso de manifiesto la conveniencia de preocuparse por el futuro de los hijos, generando

con ello otros tantos cambios en las actitudes y relaciones del grupo familiar.

El matrimonio "cristiano, estable y honesto" fue, a no dudarlo, la aspiración de la mayor parte de la población de Chile tradicional, deseosa de respetar los valores sociales y las prescripciones eclesiales. Sin embargo, no todas las parejas que se conocieron tuvieron un trato regular y decidieron iniciar una vida en común terminaron en él. Numerosos testimonios de parejas moral y/o legalmente atípicas demuestran la coexistencia de diversas formas de unión, ya sea inacabadas, larvadas, fraudulentas o legalmente definitivas.

Si bien el cortejo fue una etapa previa indispensable, no siempre terminó en un matrimonio religioso, ya que éste sólo podía ser sancionado si no existían "impedimentos". Estos representaban un límite más allá del cual los novios podían elegir libremente su pareja. Pero si los había, y no se obtenía una dispensa que los obviara, la relación no pasaba de ser un proyecto de unión inacabado.

Entre 1690 y 1890—o sea, en el Chile tradicional—los impedimentos más comunes fueron los grados de consanguinidad y afinidad prohibidos, la cópula ilícita con parientes, la celebración del matrimonio en una parroquia en la que los novios residieran por menos de seis meses y la minoría de edad. La existencia de estos impedimentos anulaba o interrumpía la unión sólo cuando la Iglesia tomaba conocimiento de ellos, por lo que más de un matrimonio fue celebrado sin solicitar los novios la respectiva licencia, sea porque lo ignoraban, sea porque cometían un fraude. En todo caso, más tarde los esposos los convirtieron en los aliados más socorridos en los juicios de nulidad matrimonial (Salinas & Cavieres 1991).

Otras uniones—esta vez "larvadas"—no pasaron más lejos de las primeras etapas del cortejo, a pesar de existir a veces promesa y aceptación mutua del matrimonio, mediante el mecanismo conocido como "esponsales". Muchas de estas rupturas fueron provocadas por los propios novios, respaldados o inclinados por acciones de terceros. Como el incumplimiento de los sponsales podía dar origen a un juicio eclesiástico y civil (Ripodaz 1977:63), los expedientes de reclamos presentados entre 1750 y 1850 permiten algunas interesantes conclusiones.

Desde luego, no es fácil determinar el "límite" hasta el cual podían llegar estas parejas. Teóricamente, la frontera entre el noviazgo y el matrimonio era su consumación. Sin embargo, muchos de los casos de sponsales que hemos observado demuestran que las relaciones sexuales entre este tipo de parejas eran comunes. Ciertamente que la mayor parte de las demandas se presentaban cuando el novio había recibido previamente—vía seducción y/o engaño—favores sexuales de la novia.

De acuerdo con las disposiciones legales, sólo los hombres mayores de 25 años podían contraer matrimonio sin previa autorización del padre del tutor. Siendo así, se comprende que la gran mayoría de los varones involucrados en demandas por incumplimiento de contrato o palabra matrimonial fueran muy jóvenes. Sin embargo, varios individuos plenamente adultos también desconocieron su compromiso anterior y se negaron a celebrar la ceremonia matrimonial.

Los expedientes relativos a demandas por incumplimiento de "palabra matrimonial" que hemos revisado corresponden, en su gran mayoría, a reclamos de aquellas novias burladas que se rehusaron a aceptar que sus novios se casasen con otras. De acuerdo con ello, eran los novios (59 casos), o los padres de éstos (11 casos), los que provocaban la ruptura. Muchas de las novias burladas se hallaban embarazadas o eran madre de un hijo, datos que se ofrecían al tribunal como prueba irrefutable del abuso de confianza al amparo del ofrecimiento de un eventual matrimonio. Por otra parte, este abuso era castigado severamente, obligándose al involucrado a transformar, a la brevedad, el sponsal en un verdadero matrimonio.

Sin embargo, la obligación anteriormente señalada puso de manifiesto una cierta contradicción con el reconocimiento explícito que hacía la Iglesia del libre consentimiento de las partes. ¿Cómo podía, entonces, obligarse a un novio a cumplir su promesa? Disponer la indemnización pecuniaria en favor de la víctima fue una salida favorable, no obstante el que algunas novias consideraron no haber reparación posible al ultraje. Con el tiempo, el honor mancillado tanto de las novias que cedieron su virginidad engañadas, como de los novios

que no cumplieron el empeño de su palabra, fue pasando a un segundo plano empujado por una creciente intermediación financiera vía negociación.

Las razones que dan los novios para justificar la anulación del noviazgo son muy directas y pocos se cuidaron de disminuir la importancia del compromiso asumido. Muchos lo hicieron después de consultar con sus padres, familiares y amigos; especialmente los primeros jugaron un rol decisivo en la desunión de estas parejas, y no podría ser de otra forma, dada la plena vigencia de los factores básicos que determinaban la formación de la familia en la sociedad tradicional: acuerdos familiares, uniones patrimoniales, semejanzas sociales, etc. Por eso el interés afectivo, a menudo invocado como justificación para formalizar el noviazgo, fue pospuesto ante otros intereses.

Algunos novios invocaron lisa y llanamente que el matrimonio con otra mujer les resultaba "más conveniente" (4 casos), y otros invocaron la "desigualdad social" (5 casos). Varios se valieron de supuestas conductas licenciosas que descubrieron en sus novias con posterioridad al reconocimiento del compromiso (8 casos), o simplemente se negaron a cumplir con su deber sin mayores explicaciones (25 casos) (Salinas & Cavieres 1991).

Las formas de matrimonio fraudulento, esto es, sin respetar las exigencias que imponía la Iglesia, fueron varias y reiteradas. La más numerosa consistió en celebrar un matrimonio por segunda vez sin estar legítimamente disuelto el anterior. A este tipo de fraude se le conoció como bigamia y con él se transgredía un principio básico de la doctrina, cual era la indisolubilidad del matrimonio, ya que sólo la muerte de un cónyuge permitía al otro volver a casarse. El delito fue perseguido y juzgado por el Tribunal de la Inquisición primero y por la justicia real —civil y criminal— después.

El quebrantamiento de la indisolubilidad del sacramento matrimonial era demasiado serio para mostrar tolerancia frente a su transgresión, y ello explica la enérgica actitud con que lo combatió la Iglesia, ya sea imponiéndole severas penas o persiguiendo sin tregua a los transgresores, hasta internalizar en el inconsciente de la sociedad el pecado prohibido. Sin embargo, el número de

casos juzgados, así como la extensión social y espacial del delito, ponen de manifiesto el recurso que hizo la sociedad tradicional a este mecanismo como alternativa natural al fracaso conyugal. En efecto, eran muy pocas las alternativas legales que tenía un esposo o esposa que, por las razones que fuera, se separaba o era abandonado por su compañero legítimo, de modo que muchos hombres y mujeres solitarios cayeron en la bigamia, buscando reivindicar un evidente fracaso matrimonial anterior.

Todo bigamo o bigama al que se le probaba que su anterior esposo o esposa estaba vivo, era un testimonio directo de una relación fracasada, que trataba de ocultar instalando su nueva residencia en un lugar distante, haciendo creer a la nueva comunidad que era soltero o viudo, cambiando de nombre o falsificando la información. Al cometer el delito en un lugar diferente de aquel en que residía, el transgresor corría un riesgo hasta que fuera descubierto. Pero si no lo era (y, por lo general, en aquellos casos en que eran denunciados el descubrimiento tomó varios años), se beneficiaba largamente de una vida apacible sin críticas ni recriminaciones sociales, como ocurría con aquellos que elegían otras alternativas, tales como el amancebamiento o el adulterio. Hoy sabemos que muchos fueron descubiertos y castigados, mas hubo otros que jamás lo fueron.

Las declaraciones de los transgresores, junto con poner énfasis en las razones legales que les eximieran de culpa, como la supuesta viudez, deslizan también otras razones, tales como presiones, necesidades, miseria, amor, adulterio, malos tratos. La justicia hizo caso omiso de estos argumentos, pero en su conjunto nos revelan una realidad mucho más compleja, que pone de relieve dos formas de unión: unas probadamente conflictivas del primer matrimonio y otras posiblemente armoniosas del segundo. La justicia, que castigó implacablemente a los infractores y sus eventuales cómplices, restableció la plena validez de las primeras y disolvió enérgicamente las segundas.

Los expedientes demuestran que había bigamos en todo el territorio y sin distinción social ni étnica, aunque preferentemente se les encuentra entre los desarraigados y los pobres. Muchos eran

itinerantes, que cambiaban fácilmente de lugar de residencia, hasta radicarse lejos de la familia en el nuevo sitio en que se casaban por segunda vez, y es que el matrimonio era también una forma de arraigo no sólo en términos físicos, sino también desde una perspectiva afectiva y sentimental (Salinas & Cavieres 1991).

Otro tipo de matrimonio fraudulento fue la celebración de la ceremonia forzando u omitiendo las formalidades exigidas por la Iglesia, tales como la presencia de testigos, las palabras sacramentales y las prohibiciones del derecho canónico. Al igual que ocurría con la bigamia, la Iglesia no podía tolerar la existencia de matrimonios cuestionados por el incumplimiento de las formalidades requeridas para un sacramento tan serio, que se le consideraba esencial del ordenamiento social.

La vida doméstica de la pareja, tanto en la sociedad tradicional como en la moderna, pareciera no estar exenta de una apenas encubierta carga de violencia psicológica y/o física. Datos recientes permiten aseverar que 8 de cada 10 mujeres, sin distinción, son agredidas (*El Mercurio*, Santiago, 1990). El precepto de "quien te quiere te aporrea" acuñado bajo el alero de una ideología tradicional de sesgo patriarcal, legítima desde un punto de vista social y, por ende, cultural, el recurso a la violencia física.

En efecto, del análisis de 307 expedientes de separación o "divorcio eclesiástico" elevados al Tribunal Eclesiástico de Santiago, entre 1700 y 1900, así como otros yacientes en Archivos Judiciales, emerge el modelo de una familia estructurada a partir de fuertes lazos de dominación y grandes desigualdades en las relaciones de poder. Estas afectaban a la mujer, la que aceptó la jerarquía masculina y se sometió a la autoridad superior del hombre. La reiteración con que las mujeres aparecen como víctimas en las fuentes hace pensar en una relativa facilidad para que ellas se protegiesen recurriendo a los tribunales. En un 80 por ciento de los casos estudiados, la mujer utilizó la causal de agresión o sevicia para la separación de su cónyuge (Salinas 1991).

La violencia doméstica afectó a todo tipo de estamentos, aunque de acuerdo con el registro, las denuncias fueron menos frecuentes en los estratos

medio y alto. Las razones invocadas por los esposos para castigar a la mujer aluden a la necesidad de corregirlas. Las golpizas como un correctivo a un mal comportamiento eran aceptadas socialmente si el motivo era "justo" y se procedía "con moderación". De ello se sigue que las mujeres que efectivamente arguyeron mal trato en las demandas eran objeto de exagerada crueldad y reiteración en el castigo.

Las más de las veces, la violencia aparece invocada como causal de divorcio en concurrencia con el concubinato o adulterio del esposo, aunque se da mayor énfasis a la relación adúltera de los cónyuges que a la agresión misma. Sin duda, existe aquí una compleja relación. En tanto la legislación civil sancionaba rigurosamente el adulterio femenino, inhibía absolutamente a la mujer para interponer una demanda por causal equivalente en contra de su marido. Por otra parte, la violencia por sí sola pareció no ser suficiente para justificar el fracaso matrimonial. Consecuentemente, el planteamiento de ambas causas en concurrencia pretendió compensar la disminuida posición de la mujer, legalmente tratada como eterna menor (Arrom 1987:71 y ss.). En concordancia con lo planteado por Beatriz Nizza, las razones accesorias señaladas por las mujeres en las peticiones de divorcio podían tener mayor importancia para la ruptura de la unión, que los malos tratos (Nizza 1980). Y la reiteración de la causal de sevicia se debe a la mayor facilidad para probarla ante el tribunal eclesiástico, lo que explica, por su parte, la truculencia de las descripciones (Salinas 1991).

Sin duda, todo abuso de la autoridad masculina requería de una demanda directa de la mujer. Pero en muy pocos casos ello era reconocido. Los límites entre la violencia aceptada y la intolerable eran muy difusos, por lo que el Tribunal sancionó contadas peticiones de divorcio. En el fondo, la defensa del matrimonio era mucho más importante.

Contrariamente a lo que podría ser supuesto *a priori*, la disolución de parejas operó también corrientemente en el Chile tradicional. Un estudio para el período 1690-1890 a través de una observación exhaustiva de la desintegración matrimonial, permite detectar los casos de anulaciones y divorcios, los que, ciertamente, habían de ser acogidos y

fallados por la autoridad eclesial. No eran ajenas a las presentaciones el fraude y, en todos los casos, una abierta disposición a poner fin —por medio de lo que en la mayor parte de los casos constituyó un mero resquicio— a una unión infeliz, por lo menos para una de las partes.

Normalmente las razones consideradas por la Iglesia para otorgar la nulidad eran aquellas que involucraban una flagrante contravención al Derecho Canónico: matrimonio habido entre parientes (grado de consanguinidad prohibida), entre novios involucrados en relaciones abiertamente rechazadas (por ejemplo: cópula ilícita del novio con la madre o la hermana de la novia), la celebración del matrimonio en una parroquia en la que los novios habían residido por menos de seis meses, la oposición paterna al matrimonio, entre otras causales. No obstante, además de estas razones, normalmente se interponían otras que no conmovían mayormente al tribunal. Probablemente, ninguna de las razones esgrimidas para la disolución del vínculo matrimonial fue siquiera intuida por la pareja al momento del matrimonio. Ellas sobrevinieron con los años de vida en común, ya que las demandas fueron interpuestas, en la gran mayoría de los casos, por lo menos dos años después del matrimonio.

Habiendo transcurrido un tiempo a veces significativo entre el matrimonio y la demanda de nulidad, es obvio que la separación traía consigo complejas concomitantes. Entre ellas, las implicancias civiles del fraude o engaño con que se vieron afectados algunos esposos. Muchas mujeres solicitaron pensiones de subsistencia a sus maridos, especialmente para atender las necesidades de los hijos engendrados mientras subsistió la unión. No cabe duda de que fueron éstos los grandes perjudicados de este tipo de situaciones. Su presencia, desgraciadamente, es muda en los testimonios.

Parece claro que la Iglesia previó y autorizó la anulación de cierto tipo de uniones, apoyándose probablemente en la inconveniencia de mantener una relación negativa tanto para los esposos como para los hijos y la sociedad. Mas, sin duda, muchas de estas demandas escondieron las verdaderas motivaciones de los propios demandantes y, si

bien el Defensor de Matrimonios intentó siempre desenmascarar las maniobras ocultas de los esposos, éstas, las más de las veces, prosperaron habido previo acuerdo entre las partes para la disolución del vínculo.

La otra alternativa de desunión de la pareja la constituyó el divorcio. Según el Derecho Canónico el "*divortium quo ad thorum*" o separación de los cuerpos, sólo podía ser concedido si existían razones muy precisas. Entre éstas estaban el mutuo consentimiento para tomar las órdenes religiosas, el adulterio, la herejía y los malos tratos o "sevicia". La demanda de separación podía ser solicitada indistintamente por el hombre o por la mujer.

Datos de divorcio recabados entre 1699 y 1899 permiten inferir que, en 622 casos, el 75 por ciento de las demandas fueron presentadas por la mujer y el 14 por ciento por el marido. El antecedente testimonial el uso frecuente que hacía la mujer del derecho que en esta materia le confería la Iglesia.

Por otra parte, en los 177 casos en que fue posible identificar el patrimonio del demandante, sólo el 30 por ciento eran "ricos" y el resto manifiestamente "pobres". A la inversa, la mitad de los demandados eran supuestamente "ricos".

¿En qué momento de la vida de la pareja se decide ponerle fin mediante un juicio de divorcio? De acuerdo con los antecedentes, las dificultades parecen haber iniciado muy pronto, casi desde el momento mismo de la unión, ya que el 22 por ciento de las solicitudes fueron presentadas antes de cumplirse el segundo año de matrimonio. El 40 por ciento de las demandas se presentó en los cinco primeros años de matrimonio.

Sin duda, el divorcio constituyó una alternativa legal para poner fin a un matrimonio desgraciado. La separación matrimonial obtenida por esta vía no era una medida transgresora de la norma, pues lo que estaba refrendada por el Derecho Canónico y, desde este punto de vista, constituía una acción legal. Sin embargo, no constituyó la medida más socorrida por los esposos desdichados.

En primer lugar, el divorcio sólo se concedía en casos extremos y plenamente justificados. En segundo lugar, esta demanda implicaba irremisiblemente un proceso jurídico que conllevaba gasto. Tanto, que la Iglesia debió crear mecanismos de

exención de pagos para permitir que los pobres tuvieran acceso a este beneficio. Por último, ganar una causa de divorcio no significó disolución del matrimonio. Para la doctrina católica, el matrimonio era único e indisoluble; por lo tanto, había que probar que la unión no era válida. La concesión del divorcio permitía la separación conyugal, pero los cónyuges no podían volver a casarse.

Los juicios de divorcio permiten perfilar un cuadro vívido de la vida conyugal cotidiana. Una larga serie de razones acompaña a las efectivamente aceptadas por la Iglesia como causales de divorcio: intento de incesto, impotencia, enfermedades contagiosas, abandono, inmoralidad, etc., todas las cuales, si bien no justificaban la cesión del mismo, expresan el grado de profunda desavenencia existente en la pareja. La historia ofrece siempre ropajes nuevos a situaciones arquetípicas añejas.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- Arrom, S.
1988 *Las mujeres en la ciudad de México, 1790-1857*. México.
- Cavieres, E.
1991 "Historiografía y familia: de la sociedad tradicional chilena a la transición a la modernización". En: R. Mellafe, ed. *Primer Informe del Seminario de la Historia de la Familia, la Población y las Mentalidades*. Santiago: Universidad de Chile.
- McCaa, R.
1983 *Marriage and fertility in Chile. Demographic turning points in the Petorca Valley, 1840-1976*. Colorado.
- Mellafe, R. & R. Salinas
1988 *Sociedad y población rural en la formación de Chile actual: La Ligua 1700-1850*. Santiago: Universidad de Chile.
- Nizza, B.
1980 "Divorcio na Capitania de Sao Paulo". En: Bruchene y Rosemberg, ed. *Vitencias, historia, sexualidad e imágenes femeninas*. San Pablo. Pp. 151-194.
- Ripodaz, D.
1977 *El matrimonio en Indias*. Buenos Aires.
- Salinas, R.
1987 "Nupcialidad, familia y funcionamiento del mercado matrimonial en Valparaíso durante el siglo XIX". *Valparaíso, historia urbana. 1536-1986*. Valparaíso.
1991 "La violencia conyugal y el rol de la mujer en la sociedad chilena tradicional. Siglos XVIII y XIX". En: Núñez, ed. *Historia de la mujer y la familia*. Quito. Pp. 37-67.
- Salinas, R. & E. Cavieres
1991 *Amor, sexo y matrimonio en Chile tradicional*. Valparaíso: Universidad Católica de Valparaíso.